

11000

MEMORANDO



Radicado No: 202511000000177873

Para:

MAY BELLINY BADILLO

Directora Regional Guajira

COORDINADORES CENTROS ZONALES

Riohacha 1, Manaure, Uribia Y Maicao

Asunto:

Orientaciones y recomendaciones para la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la operación directa de los servicios de atención integral a la Primera Infancia, también el procedimiento de Invitaciones Cerradas para la prestación de los servicios en el marco de atención integral al Pueblo Wayuu, así como para la contratación en el marco del Decreto 482 en la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira - WUINPUMÜIN

Fecha:

27 de diciembre de 2025

Respetada Directora Regional y Coordinadores Centros Zonales, Cordial saludo;

La Dirección General, Subdirección General y la Dirección de Planeación con la finalidad de garantizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia, garantizar la continuidad en la atención integral al pueblo Wayuu y la contratación en atención al territorio indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (WUINPUMÜIN) en el Departamento de la Guajira, imparten las siguientes orientaciones para la suscripción y perfeccionamiento de los contratos de aporte y de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 987 de 2012, las disposiciones contenidas en la Resolución 6798 del 18 de octubre de 2023, Decreto 482 de 2025 y el Protocolo Conjunto para la Aplicación de Buenas Prácticas Administrativas en los Procesos Contractuales y Financieros en el marco del cumplimiento del Auto 310 de 2024 emitido dentro del seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y el Manual de Contratación vigente.

Las actuaciones por desarrollar descritas en el presente memorando estarán sujetas a los principios de orden constitucional que rigen la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, los cuales se enmarcan en los imperativos de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y son

www.icbf.gov.co



acogidos por la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. De igual forma, será necesario dar cumplimiento irrestricto a lo establecido en el Manual de Contratación vigente, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 22 que trata de la Planeación de la Actividad Contractual, con relación a la identificación de las necesidades y los mecanismos para satisfacer las funciones, objetivos misionales y metas trazadas por el ICBF, en cumplimiento de las funciones administrativas y los fines asociados al interés general, así como la consecución eficiente de resultados armonizados con los objetivos y planes estratégicos del Gobierno Nacional y del sector al cual se pertenece.

Del mismo modo se resalta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° del Manual de Contratación vigente, los funcionarios y colaboradores encargados de la actividad contractual en la sede de la Dirección General y en las Regionales del ICBF asumen un compromiso ético y moral en sus actuaciones, garantizando condiciones de legalidad, equidad, objetividad y justicia en la gestión administrativa y contractual.

Por su parte, las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la vida”) reconocen que existen actores diferenciales que aportan significativamente al cambio, entre los cuales se encuentran los pueblos y comunidades étnicas, históricamente excluidas e invisibilizadas; y quienes, a partir de sus vivencias y en el marco del reconocimiento del valor de su cultura, cosmovisión y cosmogonía, pueden generar cambios significativos y definitivos en el cierre de brechas para alcanzar la igualdad y seguridad humana.

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo -PND- expedido mediante la Ley 2294 de 2023 dentro de los ejes transversales contempló como actores diferenciales para el cambio a las niñas y los niños de Colombia y en virtud del artículo 2º del mismo cuerpo normativo que integró el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida” se impuso el deber de implementar acciones para lograr la universalización de la atención integral con calidad de forma territorial y progresiva, en los municipios con condiciones de mayor riesgo de vulneraciones para la niñez y hacer énfasis en territorios rurales y rurales dispersos, comunidades étnicas y campesinas. Dentro del PND, el ICBF es mencionado como actor clave en diferentes objetivos y metas relacionadas con las garantías de derechos, protección social, desarrollo integral de la niñez, las juventudes y las familias propendiendo por contribuir a la construcción de la Paz Total.

Del mismo modo, el ICBF ha emprendido la transformación progresiva de los servicios misionales hacia la reducción de la tercerización de servicios misionales. Esto implica que la entidad contrate de manera directa los diferentes componentes de la canasta de atención (talento humano, alimentos, materiales pedagógicos, equipamiento y apoyos administrativos, entre otros) sin intermediación. La operación directa permite ejercer mayor control sobre la calidad, optimizar los recursos y para este caso, garantizar que los

materiales pedagógicos y didácticos cumplan con los estándares técnicos definidos por el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional.

1. OPERACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

Se entiende por operación directa desde el sector público aquella operación de servicios que no requiere la vinculación de un tercero de naturaleza jurídica para cumplir la misionalidad de las entidades directamente implicadas, en ese sentido, se ha determinado desde la línea programática de gobierno lograr la mayor implementación de operación directa en el marco del fortalecimiento de la acción pública del Estado. Dicha operación directa evitaría la pérdida de recursos en la tercerización y la posible manipulación y los costos transaccionales con el dinero público destinado a la atención de las niñas y los niños.

A través de la operación directa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF asume de manera directa la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia, ejerciendo la responsabilidad operativa, administrativa, financiera y técnica del servicio, incluyendo la planeación, contratación del talento humano, ejecución, seguimiento y control, sin delegar la ejecución del servicio a un operador externo, salvo apoyos puntuales que no impliquen transferencia de la responsabilidad principal.

1. Servicios a los cuales les aplican las presentes orientaciones:

Las presentes orientaciones serán aplicables a los servicios de atención a la primera infancia relacionados en el archivo denominado Zonificación Operación Directa. Dicho archivo recoge los resultados del ejercicio de planeación desarrollado, donde se analiza las coberturas, modalidades de atención, particularidades operativas y requerimientos técnicos y administrativos de cada territorio. Esta información constituye la base para la estructuración de los procesos de contratación del talento humano requerido para la operación directa, asegurando coherencia con las metas institucionales, la disponibilidad presupuestal y las condiciones específicas de prestación del servicio en cada regional.

2. Roles y perfiles del talento humano:

Para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia de manera directa, deberán conformarse equipos de trabajo integrales, cuyos integrantes cuenten con conocimiento y comprensión de las condiciones territoriales, sociales y culturales de las niñas, los niños, sus familias, cuidadores y comunidades. En este sentido, corresponde a la Dirección Regional y Centros Zonales garantizar que el talento humano vinculado cumpla con los perfiles y roles establecidos en las Guías Operativas de los servicios que serán

prestados de manera directa por el ICBF, atendiendo los criterios técnicos y formativos definidos para cada modalidad. El personal que se contrate para operación directa corresponde al personal que se contrataba antes con los operadores y dicho personal si es administrativo, de coordinación o integralidad de la calidad de la atención entrará a fortalecer de manera conjunta desde el centro zonal respectivo que tenga operación directa. El personal cuyas obligaciones contractuales se desarrollen directamente con niñas y niños presentarán prueba cuida para revisar posibles alertas, y se conservará la priorización de género ya estipulada en memorandos anteriores. Los perfiles de coordinación de servicios de operación directa deberán ser seleccionados con las mejores cualidades para la prestación de sus servicios como organizadores directos de la atención, igualmente se sugiere en el apartado 1.5. del presente memorando contratarlos primero para servir de apoyo a la organización, así como delegar en ellos el apoyo a la supervisión de los equipos de las unidades de servicio respectivas.

3. Honorarios del talento humano:

Respecto de los honorarios, estos serán definidos en la matriz de Necesidades de Adquisiciones de Servicios - NAS, en concordancia con la canasta indicativa vigente y las obligaciones asignadas. En consecuencia, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operación directa de los servicios de atención a la primera infancia, se encuentran exceptuados de la aplicación de la tabla de honorarios adoptada mediante Resolución No. 4848 del 27 de agosto de 2025, y se rigen por la canasta indicativa vigente.

4. Objetos y Obligaciones:

Los objetos y obligaciones de cada uno de los roles se encontrarán relacionados en la matriz de Necesidades de Adquisiciones de Servicios - NAS de la Regional, y servirán como insumo para la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales que se generarán por combinación de correspondencia por parte de la Dirección de Contratación y demás áreas intervinientes, procurando la armonización y sistematización de los procesos. En cualquier caso, las direcciones regionales estarán alerta para que las obligaciones y objetos sean concordantes con los servicios que se contratarán.

5. Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución de los contratos estará relacionado en la matriz de Necesidades de Adquisiciones de Servicios - NAS de la Regional, y servirán como insumo para la elaboración de los Estudios Previos y demás documentos precontractuales que se generarán por parte de la Dirección de Contratación y demás áreas intervinientes, procurando la armonización y

sistematización de los procesos. La Dirección Regional deberá garantizar que los procedimientos de planeación y gestión contractual se adelanten con la debida anticipación, de manera que los contratos puedan iniciar ejecución dentro de los plazos definidos. El plazo de ejecución en cualquiera de los casos estará contado en días y meses y no en fechas, con el fin de que el mismo plazo se comience a ejecutar una vez perfeccionada la legalización. Es necesario recordar que en el marco de ley de garantías todos los contratos deberán quedar suscritos antes del 30 de enero del año 2026 y con fecha de inicio 1 de febrero e inicio de atención a niños y niñas para el día 9 de febrero, contando con la semana previa para la fase de alistamiento. Con el propósito de asegurar el adecuado alistamiento y la puesta en marcha de los servicios, se priorizará la contratación del talento humano con el rol de Coordinación.

6. Forma de pago de los contratos de prestación de servicios para la operación directa:

El valor del contrato se pagará al contratista en mensualidades vencidas, con la excepción del mes de diciembre, que se pagará dentro de dicho mes (cuando aplique). El valor del primer pago se encuentra calculado teniendo en cuenta los tiempos requeridos para el inicio de la operación de los servicios de atención a la primera infancia y las actividades preparatorias asignadas a cada rol. Los desembolsos se realizarán previa presentación y aprobación del informe de ejecución de actividades con visto bueno de apoyo a la supervisión y aval por parte de la supervisión del contrato.

7. Justificación de la necesidad:

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, como entidad estatal descentralizada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, tiene a su cargo la ejecución de las políticas públicas en materia de protección integral a la niñez y la familia, conforme a lo establecido en la Ley 7 de 1979, la Ley 75 de 1968 y sus disposiciones reglamentarias. Dentro de sus funciones misionales se encuentra la prestación directa de servicios de atención integral a la primera infancia, en concordancia con las normas que regulan su régimen especial y con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política.

En el marco de las apuestas del Gobierno Nacional, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (2022-2026), el Instituto trabaja de manera progresiva en la universalización de la atención integral a la primera infancia, con especial prioridad en las comunidades rurales y en los territorios más afectados por la violencia. En este sentido, la operación directa de los servicios de primera infancia se constituye en una estrategia fundamental para avanzar en dicha política pública.

La operación territorial directa del ICBF se concibe como la gestión mediante el cual el Estado, a través del Instituto, asume sin intermediación la atención de niñas, niños, mujeres y personas gestantes, garantizando el derecho a la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, lo cual implica asumir la responsabilidad técnica, operativa, administrativa, financiera y jurídica necesaria para el cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas en los Manuales Técnicos y Guías Operativas de los servicios.

En este contexto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se justifica la contratación directa de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para la implementación de las modalidades de atención institucional, familiar, comunitaria, propia e intercultural y otros servicios que se requieran para la garantía de los derechos en el marco de la normatividad presentada.

8. Matrices de Contratación:

La Dirección de Contratación elaborará la Matriz de Necesidades de Adquisición de Servicios - NAS 2026, con base en la información técnica proporcionada por la Dirección de Primera Infancia, conforme a las necesidades identificadas en la Regional Guajira. Esta herramienta, que no implica obligación de contratar, tiene como propósito anticipar los servicios requeridos, los perfiles profesionales necesarios y sus características, sirviendo como insumo clave para la planeación contractual de la vigencia 2026. Se priorizará en la misma los perfiles registrados en el CUÉNTAME valorando la experiencia de atención ya ganada tanto por agentes educativos como por el resto del personal de atención, sin embargo, la calidad humana de la persona a prestar el servicio, así como otros factores territoriales podrá contemplarse para tener la calidad de personal en la atención a la primera infancia determinada en guías, manuales y memorandos respectivos. En caso de tener dudas o inconvenientes con el uso o diligenciamiento de la Matriz de Necesidades de Adquisición de Servicios - NAS 2026, podrán contactarse con Jennifer Caycedo Gómez al correo Jennifer.Caycedo@icbf.gov.co o con Alfonso Andrés Vanegas Tovar al correo Alfonso.Vanegas@icbf.gov.co.

9. Madres Comunitarias denominadas “Tránsito”:

Para el caso de las madres comunitarias tránsito vinculadas en unidades de servicios priorizadas para operación directa, es necesario reportar los datos personales y de contacto, así como la forma actual de vinculación a la Dirección de Primera Infancia para revisar la ruta de contratación, de conformidad con su estado actual de vinculación para la prestación de servicios. Este reporte se debe realizar máximo el 5 de enero de 2025. En ningún caso

una madre comunitaria transito que tiene durante el 2025 contrato laboral, podrá vincularse a un contrato de prestación de servicio para el 2026, y se establecerán, de acuerdo con el reporte de la regional, las medidas para garantizar la continuidad de su labor.

10. Proceso de selección y contratación del talento humano requerido para la prestación directa de los servicios

En lo referente al proceso de selección, las directrices y orientaciones aplicables se encuentran consignadas en el Título 2 del Memorando No. 202512400000153223 del 24 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: *“Orientaciones para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la operación directa de los servicios de atención a la primera infancia”*.

11. Cronograma general para realizar la contratación

Esto se debe revisar a la luz de todo el memorando y no solo de un apartado.

ACTIVIDADES	FECHAS MÁXIMAS
<p>Etapa 1 - Planeación</p> <p>Esta etapa implica las actividades relativas al contacto inicial con los profesionales identificados, la gestión del registro en los sistemas de información, la revisión inicial de documentos acorde con lo indicado anteriormente. Comprende las actividades relacionadas en el numeral 2 y en los sub numerales 3.1 y 3.2. del Memorando No. 202512400000153223 del 24 de noviembre de 2025.</p>	Hasta el <u>9 de enero de 2026</u>
<p>Etapa 2 - Precontractual</p> <p>Esta etapa implica las actividades relativas al control de legalidad proceso contractual en SECOP II, incluyendo la generación de los CDPs en la vigencia 2026. Comprende las actividades relacionadas en los sub numerales 3.3, a 3.15 del Memorando No. 202512400000153223 del 24 de noviembre de 2025.</p>	Máximo hasta el 23 de enero de 2026
<p>Etapa 3 - Contractual</p> <p>Esta etapa implica las actividades relativas al cumplimiento de los requisitos para el inicio de ejecución de los contratos y su posterior ejecución. Comprende las actividades relacionadas en los sub numerales 3.16 y 3.17 del Memorando No. 202512400000153223 del 24 de noviembre de 2025.</p>	Máximo hasta el treinta (30) de enero de 2026 para inicio de ejecución.

2. ATENCIÓN DIRECTA CONJUNTA CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN)

En desarrollo de la apuesta del Gobierno Nacional por avanzar progresivamente hacia la universalización de la educación inicial en el marco de la atención integral y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1411 de 2022 respecto a la organización de la oferta de servicios, el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional se han articulado para gestionar el proceso a través del cual algunos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) pasen a constituirse en espacios de atención conjunta de los dos sectores, teniendo en cuenta la progresividad de incorporación de recursos para la primera infancia a través del Sistema General de Participaciones, así como las mejores condiciones de calidad para la atención integral a la primera infancia en los dos ciclos y la mejora de procesos de cualificación para el talento humano. En La Guajira se ha determinado en el marco del Convenio interadministrativo No. 01015792023 suscrito entre Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que dicha operación conjunta se realizará en 10 Centros de Desarrollo Infantil. La articulación se realizará con las secretarías de educación respectiva para lograr que los dos ciclos funcionen en condiciones de equidad en tiempos, horarios y alimentación de las niñas y los niños de primera infancia buscando las mejores condiciones de atención en términos de calidad, oportunidad y permanencia.

Para lograrlo, se hace necesario que se desarrollen las siguientes acciones de coordinación por parte de la dirección regional y el centro zonal respectivo, la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación y la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estará atenta a apoyar las acciones referidas:

3. La sede del CDI se inscribirá como parte de las sedes educativas de la Institución Educativa más cercana a la misma.
4. La matrícula de los niños de 3 a 5 años de dicha sede será cargada al SIMAT por parte de la institución educativa, así como en el CUENTAME marcando conjuntamente la atención de recurrencia.
5. El personal de atención para los grados del segundo ciclo educativo será asumido dentro de la planta provisional de la secretaría de educación, solicitando al Ministerio de Educación Nacional las horas necesarias para mantener los tiempos de atención. Para los casos de unidades de servicio de carácter étnico las autoridades podrán presentar las maestras respectivas que atenderán en su territorio.
6. El personal de atención para los grados del primer ciclo educativo se contratará por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como el personal de cocina para el mismo. Para ello es necesario aplicar los mismos pasos destinados a la operación directa descritos en el punto I. del presente memorando.
7. La alimentación de las niñas y los niños de primer ciclo y segundo ciclo será coordinada de manera conjunta por las dos entidades con las secretarías de educación y los centros zonales y direcciones regionales del ICBF teniendo como principio la mejora de las condiciones de calidad de esta.

Los Centros de Desarrollo Infantil propuestos para atención conjunta con recursos compartidos en La Guajira son:

Centro Zonal UDS	Municipio UDS	Código Unidad Servicio UDS	Unidad Servicio UDS
CZ FONSECA	Fonseca	4427900130071	CDI LA AMISTAD
CZ RIOHACHA 1	Riohacha	4400100126199	CDI TOMARAZON
CZ RIOHACHA 1	Riohacha	4400100012928	CDI DE CAMARONES
CZ RIOHACHA 1	Riohacha	4400100013012	CDIT MI DULCE INFANCIA SEDE 1
CZ RIOHACHA 1	Riohacha	4400100013042	CDIT VILLA FATIMA
CZ RIOHACHA 1	Riohacha	4400100014683	CDI MONGUI
CZ ICHITKI WAYUUWAAPULE	Uribia	4484700042200	CDI PEPSUAPA
CZ ICHITKI WAYUUWAAPULE	Uribia	4484700044988	CDI CAMINO VERDE
CZ ICHITKI WAYUUWAAPULE	Uribia	4484700123203	CDI MEDIA LUNA
CZ ICHITKI WAYUUWAAPULE	Uribia	448471115246	CDI POPORTIN

La selección de los CDI responde a la convergencia de criterios como: la propiedad de la infraestructura, el número de niñas y niños inscritos en el servicio que a marzo de 2026 tengan entre 3 y 6 años, la disponibilidad de planta docente para preescolar en la entidad territorial certificada en educación. Cabe resaltar que, una vez realizados los distintos filtros y análisis de cada criterio mencionado, se procederá a una revisión con la regional ICBF y la entidad territorial certificada que correspondan.

8. OPERACIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN CERRADA PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL EN TERRITORIOS NO COBIJADOS POR LA SENTENCIA O URBANOS.

Para la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia mediante modalidad institucional y modalidad propia e intercultural en territorios no cobijados por la Sentencia T-302 de 2017 o en contextos urbanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF adelantará los procesos de contratación a través del procedimiento de Invitación Cerrada, en los términos previstos en el Manual de Contratación vigente, el Estudio del Sector y las orientaciones institucionales expedidas para tal fin.

La invitación cerrada se realizará al operador que realizó la atención de manera eficiente durante el año 2025, para ello se tendrá en cuenta el concepto del supervisor, el acta de la asamblea de las familias verificando que las madres y los padres de familia de la asamblea correspondan a la información registrada en cuéntame, la asamblea deberá tener participación de las niñas y los niños y ser verificada su autenticidad por un profesional de

ICBF determinado por la Dirección Regional, igualmente se revisará el concepto de las maestras, el pago al personal del servicio y también que dicha organización no tenga registros de reportes a fiscalía por situaciones relacionadas con presunta corrupción. Se evita así un daño reputacional a la entidad.

En caso de no contar con estos mecanismos de transparencia y aceptación comunitaria se procederá a informar a la Dirección de Primera Infancia que no existe idoneidad del operador de continuidad para determinar una ruta a seguir que en cualquier caso buscará favorecer una operación pública y transparente. Se sugiere en dichos casos presentar opciones con Universidades Públicas de preferencia con programas de educación que permitan cualificar la prestación de los servicios de educación inicial.

El procedimiento de invitación cerrada constituye un mecanismo de selección que permite garantizar la continuidad del servicio, la adecuada planeación contractual y la selección objetiva de las entidades prestadoras, atendiendo criterios de idoneidad, experiencia, capacidad técnica, administrativa y financiera, así como las condiciones específicas de prestación del servicio en cada territorio. Este procedimiento resulta especialmente pertinente en aquellos contextos donde se requiere asegurar la permanencia de la atención, minimizar riesgos operativos y evitar afectaciones en la garantía de los derechos de las niñas y los niños.

El proceso de selección, verificación y suscripción de los contratos adelantados bajo el procedimiento de invitación cerrada se registrará por las directrices y orientaciones contenidas en el Memorando No. 202516000000163173 del 4 de diciembre de 2025, cuyo asunto es *“Orientaciones para la contratación por el procedimiento de Invitaciones Cerradas y contratos y convenios interadministrativos con Instituciones de Educación Superior para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia”*, así como por los principios de transparencia, economía, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad y publicidad que rigen la función administrativa.

La aplicación del procedimiento de invitación cerrada deberá articularse con los ejercicios de planeación, zonificación y costeo adelantados por la entidad, teniendo en cuenta la cobertura proyectada, la modalidad de atención, la disponibilidad presupuestal y las particularidades territoriales. En este sentido, la Dirección Regional será responsable de adelantar los trámites contractuales de manera oportuna, garantizando la adecuada estructuración de los procesos, la observancia de los lineamientos técnicos y administrativos y la continuidad en la prestación del servicio.

En todo caso, cuando se trate de modalidades propias e interculturales en territorios no cobijados por la Sentencia T-302 de 2017, el procedimiento de invitación cerrada deberá

aplicarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 37 del Manual de Contratación vigente (V7), garantizando el enfoque diferencial, la pertinencia cultural y el reconocimiento de las formas propias de organización y participación de las comunidades étnicas, sin perjuicio de la aplicación de los criterios generales de selección objetiva, transparencia y control del gasto público, asegurando que la prestación del servicio responda a las condiciones sociales, culturales y territoriales de las comunidades atendidas. En caso de presentar para esta operación a entidades nuevas deberán pasar por los filtros correspondientes de transparencia y anticorrupción previstos por la entidad y demás criterios establecidos para la contratación.

Es necesario precisar que en ningún caso se podrán adelantar procesos contractuales por invitación cerrada una vez inicia el periodo de restricción de la ley de garantías dispuesto para la temporada electoral. En cualquier caso, la continuidad de una entidad operadora podrá verse afectada si la entidad se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

9. Si la entidad operadora no se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones, liquidaciones laborales, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente para la atención del servicio, cuando aplique, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios.
10. Si la entidad operadora tiene procesos sancionatorios contractuales o de calidad en curso que puedan afectar la prestación de los servicios de atención con calidad, o que limiten la capacidad jurídica de la Entidad para contratar.
11. Si la entidad operadora ha presentado fallas en reporte de datos antropométricos y/o activaciones de ruta por desnutrición u otros riesgos de salud en los casos de niñas y niños que hayan fallecido por desnutrición. Esta información se sustenta en el marco de los comités de emergencia nutricional para cada uno de los casos de niñas y niños fallecidos durante la vigencia 2025.
12. Si la entidad operadora ha presentado alertas comunitarias por trasteo de niñas y niños para completar cobertura, registros civiles falsos, y/o alteración de minutas, venta de mercados entregados para las familias, comercialización de Bienestarina y otros factores de riesgo de pérdida del recurso público.
13. Si la entidad operadora estuviera incurso en denuncias realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar familiar a la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de corrupción, en virtud que mientras procede la investigación no se correrán riesgos de daño reputacional para la entidad ni riesgo del uso indebido del recurso público.
14. OPERACIÓN DE LA ATENCION INTEGRAL AL PUEBLO WAYUU EN SUS TERRITORIOS ANCESTRALES EN EL MARCO DE LA SENTENCIA T-302 DE 2017

Las presentes orientaciones están dirigidas a la implementación de los servicios establecidos en la *“Guía para la Atención Integral al Pueblo Wayuu en sus Territorios Ancestrales en La Guajira”*, para la atención de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y las familias en los territorios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017, correspondientes a los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, mediante la suscripción de contratos de aporte, garantizando que las actuaciones se desarrollen con enfoque diferencial y territorial, en respeto de las costumbres, estructuras sociales, formas de organización y dinámicas internas de participación del pueblo Wayuu, y asegurando los principios de imparcialidad y transparencia en la contratación, conforme a lo señalado en el objetivo sexto del referido pronunciamiento jurisprudencial, el Protocolo Conjunto para la Aplicación de Buenas Prácticas Administrativas en los Procesos Contractuales y Financieros en el marco del cumplimiento del Auto 310 de 2024 emitido dentro del seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y a las orientaciones contenidas en la *Guía de Lineamientos de Transparencia y Selección Objetiva para el Departamento de La Guajira*, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.¹

IV.1. Aspectos sustanciales del proceso de contratación.

15. Objeto. Prestación de servicios de atención integral al Pueblo Wayuu, en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y la superación del estado de cosas inconstitucionales, conforme lo orientado en la guía de atención integral al Pueblo Wayuu en sus territorios ancestrales.
16. Consideraciones de territorialidad y población participante: Se precisa que el ámbito de esta atención integral tiene como centro las comunidades que están establecidas en el territorio Wayuu de la zona rural de los cuatro municipios priorizados por la Sentencia T 302 de 2017, y los beneficiarios y participantes son exclusivamente familias habitantes de estos territorios de origen y pertenencia Wayuu en el marco de la preservación cultural determinado también en el auto 004 de 2009 de salvaguarda a pueblos indígenas en alto riesgo de extinción.
17. Principio de transparencia: Para mejorar las condiciones de análisis de los datos de las organizaciones operadoras del modelo es necesario precisar que todas las organizaciones pasarán por revisión del equipo de análisis transversal y forense denominado “Equipo de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Defensa de lo Público”, en el marco de las funciones establecidas en la Resolución No. 4812 del 26 de mayo de 2023. Dicha revisión tiene como propósito garantizar la observancia de

¹ el Protocolo Conjunto fue expedido el 12 de septiembre de 2025 y que la Guía de Lineamientos de Colombia Compra Eficiente corresponde también a 2025.

los principios de transparencia, legalidad, integridad y selección objetiva que rigen la contratación pública, así como prevenir eventuales riesgos de conflicto de interés, favorecimiento indebido o prácticas restrictivas de la competencia.

18. Permanencia y sostenibilidad de la atención: Con el fin de lograr la mayor cantidad de población atendida, así como la permanencia de todo el año en la atención se ha diseñado un mecanismo para el 2026 que permita la gradualidad de la atención de acuerdo con las condiciones territoriales y presupuestales disponibles. En esa medida se planea una atención sostenida por 11.5 meses del año a partir de una combinación gradual de atenciones desde las prioritarias vitales, la educación inicial, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, y el fortalecimiento cultural, combinando en tiempo y gradualidad los logros de las metas estratégicas de la atención.
19. Plazo de los contratos: el plazo de ejecución de los contratos de aporte será inicialmente de 9.5 meses buscando una evaluación de la prestación del servicio y, si la ejecución ha sido eficiente y transparente, llegar con adición presupuestal hasta completar los 11.5 meses previstos en los ciclos de atención gradual descritos en la guía técnica de la atención. Es necesario precisar que todas las acciones precontractuales y las de legalización contractual deberán realizarse antes del inicio de las restricciones propias de la ley de garantías, por lo cual se estima que dichos procesos finalicen antes del 22 de enero del 2026.

IV.2. Continuidad del servicio con las mismas unidades ejecutoras:

Para la contratación con cargo a los recursos de la vigencia 2026, se ha definido como prioridad garantizar la continuidad en la prestación del servicio mediante las Unidades Ejecutoras que correspondan a: Asociaciones de Autoridades Tradicionales y/o Ancestrales y Organizaciones Indígenas; así como Uniones Temporales y/o consorcios conformados exclusivamente por Organizaciones Indígenas, o por Asociaciones de Autoridades Tradicionales y/o Ancestrales en conjunto con entidades sin ánimo de lucro, siempre que al menos uno de sus integrantes corresponda a una organización de base étnica. En ningún caso podrán participar organizaciones cuyo domicilio principal se encuentre ubicado en un departamento diferente a La Guajira.

Las anteriores medidas, obedecen a las solicitudes de fortalecimiento organizacional del pueblo Wayuu, así como a las demandas realizadas por las diferentes medidas normativas de la Corte Constitucional encaminadas a contar con la participación directa de las autoridades ancestrales en los programas que benefician a sus comunidades. Así mismo, se ha de entender que la autoridad ancestral corresponde a aquella reconocida por la asamblea

indígena o el mecanismo de elección que tenga la comunidad y el reconocimiento de este ante el Ministerio del Interior como lo establece la normativa vigente.

Para la determinación de la continuidad, además de la voluntad expresa de la autoridad ancestral respectiva de cada comunidad, es necesario que cada supervisor expida una certificación expresa sobre la necesidad de la continuidad de la atención con la Unidad Ejecutora revisando la respectiva gestión documental, el cabal y buen desempeño en la ejecución del contrato, así como la necesidad de la comunidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

20. Que las Unidades Ejecutoras se encuentren al día en el pago de salarios, prestaciones, liquidaciones laborales, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente para la atención del servicio, cuando aplique, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios.
21. Que las Unidades Ejecutoras no tengan procesos sancionatorios contractuales o de calidad en curso que puedan afectar la prestación de los servicios de atención con calidad, o que limiten la capacidad jurídica de la Entidad para contratar.
22. La Unidad Ejecutora de continuidad no haya presentado fallas en reporte de datos antropométricos y/o activaciones de ruta por desnutrición u otros riesgos de salud en los casos de niñas y niños que hayan fallecido por desnutrición. Esta información se sustenta en el marco de los comités de emergencia nutricional para cada uno de los casos de niñas y niños fallecidos durante la vigencia 2025 que fueron atendidos por contratos de aporte para la atención integral Wayuu.
23. La unidad ejecutora de continuidad no debe tener alertas comunitarias por trasteo de niños y niñas para completar cobertura, registros civiles falsos, y/o alteración de minutas, venta de mercados entregados para las familias, comercialización de Bienestarina y otros factores de riesgo de pérdida del recurso público destinado a la alimentación de los niños y niñas Wayuu.
24. La unidad ejecutora no podrá estar incurso en denuncias realizadas por el Instituto colombiano de Bienestar familiar a la fiscalía general de la nación por presuntos actos de corrupción, en virtud que mientras procede la investigación no se correrán riesgos de daño reputacional para la entidad ni del uso indebido del recurso público.

A su vez, este certificado, obligatorio para la continuidad, tendrá como referencia y de uso obligatorio el documento de *Balance de Ejecución de Unidades Ejecutoras para la Atención al Pueblo Wayuu*, el cual fue diligenciado y aportado por la supervisión en el marco de los

componentes técnicos, jurídicos y financieros. En consecuencia, cuando en estos informes se identifiquen alertas, hallazgos o riesgos asociados a posibles irregularidades, incumplimientos o afectaciones a la integridad institucional, no será procedente adelantar procesos de contratación ni dar continuidad contractual con la unidad ejecutora involucrada. Esta medida busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, prevenir prácticas corruptas y asegurar que la prestación de los servicios se realice por operadores que actúen con probidad, responsabilidad y apego a la normativa vigente, salvaguardando así el interés general y los derechos de la población beneficiaria.

Para confirmar la aceptación de la comunidad respecto a la continuidad de la Unidad Ejecutora, se adelantarán las verificaciones en territorio de acuerdo con el procedimiento establecido para desarrollar este ejercicio, y el mismo será coordinado por Dirección General, Subdirección General y el equipo verificador de la Dirección Regional, este aval deberá ser dado por la autoridad tradicional o ancestral de la comunidad participante en la atención. En caso de evidenciar transacciones económicas entre las partes para dicha aceptación invalidará dicha verificación y reportará al equipo jurídico la circunstancia identificada para las acciones correspondientes.

IV.3. Cambios de unidades ejecutoras a petición de comunidades

En el marco del proceso de verificación, antes de proceder con la contratación y zonificación, las comunidades podrán cambiar de unidad ejecutora siempre que dicha unidad ejecutora no tenga causales de no continuidad, por lo que deberá informarse a la autoridad en caso de que la unidad ejecutora seleccionada tenga causales que le impidan dar continuidad contractual. En cualquier caso, de existir más de una unidad ejecutora para el cambio se privilegiarán las asociaciones de autoridades ancestrales como la forma organizativa prioritaria para el control del recurso público; así como los resguardos, o consejos indígenas. En estos casos, una vez perfeccionados los contratos y con el fin de contar con el acompañamiento de los entes de control del recurso público, se sugiere que, una vez legalizados los contratos con este tipo de entidades deberá remitir comunicación informativa a la Procuraduría y Contraloría regionales para su control y monitoreo respectivo. No se podrá hacer cambio de unidad ejecutora por una nueva organización que sea tipo entidad sin ánimo de lucro, solamente por las de continuidad que no estén incurso en causales de no contratación, y el cambio se podrá realizar una única vez por vigencia, exceptuando casos extraordinarios que impliquen afectación en la calidad de la atención.

IV.4. Costeo y matriz de validación de contratación:

Una vez realizado el ejercicio de verificación a las autoridades tradicionales o ancestrales de todas las comunidades de continuidad por municipio, en los términos establecidos en el

procedimiento de verificación para el aval de las Unidades Ejecutoras, la información derivada de este procedimiento deberá ser cargada en el sistema de información dispuesto por la Dirección de Planeación.

Una vez el equipo de verificación de la Dirección Regional, ha realizado el cargue de las verificaciones procederá a informar por correo electrónico a la Dirección de Planeación nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que proceda con la calculadora de costos y entregue la información a la subdirección general.

La subdirección general, consolida y valida la información de costos sin exceder los topes correspondientes a los contratos de aporte, así como la validación de entidades propuestas de acuerdo con los criterios establecidos por el equipo de transparencia y envía a la dirección regional las matrices para proceder con las invitaciones correspondientes, una vez recibida la matriz no deberá tardar más que un día hábil para expedir las invitaciones correspondientes.

IV.5. Contratación modalidad propia y ANOÜJIA en territorios rurales de los cuatro municipios objeto de la Sentencia T 302

Para el año 2026 no se programa la operación de estas modalidades en los cuatro municipios objeto de la sentencia T 302 en sus zonas rurales, por tanto, todas las unidades presentes en estos territorios pasarán a la atención determinada en la *“Guía para la Atención Integral al Pueblo Wayuu en sus Territorios Ancestrales en La Guajira”* la cual está adaptada en sostenibilidad y permanencia de la operación durante el 2026. Estas comunidades les aplicarán las condiciones de contratación descritas en los apartados correspondientes a la Guía y/o al territorio de Norte Extrema.

IV.6. Oferentes nuevos:

Para la contratación de entidades sin ánimo de lucro nuevas, es decir, que no se hayan vinculado con anterioridad en la implementación de la *“Guía para la Atención Integral al Pueblo Wayuu en sus Territorios Ancestrales en La Guajira”*, en los cuatro territorios priorizados, se surtirá proceso de verificación siempre que las comunidades de continuidad soliciten cambio de Unidad Ejecutora y den aval a la nueva asociación que para este caso se precisa sea una asociación u organización indígena que opere y tenga experiencia específica en el municipio en donde se desarrollará la implementación de la atención referida. La vinculación de organizaciones que no correspondan con estas categorías (asociación de autoridades ancestrales, u organizaciones indígenas wayuu) no podrán ser vinculadas sin revisión, análisis y autorización de la Subdirección General y el equipo de transparencia de Sede Nacional.

Inmerso a este proceso, deberán hacerse exigibles los requisitos mínimos de los componentes jurídicos, financieros y de experiencia acorde con lo indicado en el Estudio del Sector, al igual que el procedimiento de verificación que mediante acuerdo colectivo permite a las autoridades ancestrales y tradicionales de las comunidades Wayuu, definir la Unidad Ejecutora que realizará la atención en cada uno de sus territorios, así como los demás requisitos que la ordenación del gasto considere deban aplicarse en su gestión contractual lo cual debe constar en los documentos y estudios previos.

Para la implementación de la atención se considerará únicamente como oferente nuevo a las organizaciones de base del territorio con domicilio en el Departamento de La Guajira, entendiéndose como organizaciones de base las siguientes:

25. Grupos Étnicos: Cabildos, Asociaciones de Cabildos, Autoridades Tradicionales indígenas, Consejos Indígenas Wayuu.
26. Asociaciones de Autoridades Ancestrales Wayuu, Autoridades de Resguardos Wayuu.

De igual manera, Uniones Temporales y/o consorcios conformados exclusivamente por Organizaciones Indígenas o por Asociaciones de Autoridades Tradicionales/Ancestrales.

IV.7. Verificación financiera, técnica y jurídica:

Corresponde al proceso de verificación financiera, técnica y jurídica (si la Unidad Ejecutora es de continuidad no requiere nueva verificación técnica) y el procedimiento se realiza en unidades de trabajo Dirección Regional. Los criterios de verificación serán los estipulados en el estudio de sector anexo.

Para el proceso de evaluación, se establecerán equipos de trabajo de la Dirección Regional con el fin de agilizar los procesos de calidad, subsanación y verificación oportuna y objetiva de los documentos de las Unidades Ejecutoras.

Igualmente, se realizará la verificación jurídica y financiera correspondiente, obviando la evaluación técnica en el entendido que dicha evaluación estará surtida con la ejecución realizada el presente año cuando se trata de continuidad del servicio por la misma Unidad Ejecutora y cuenta con el aval de continuidad de la supervisión del contrato previo.

IV.8. Suscripción y legalización del contrato:

Es necesario precisar que la ejecución contractual no requiere acta de inicio, en tanto el contrato inicia su ejecución, a través de la plataforma transaccional SECOP II, una vez se ha

legalizado y aprobada la póliza. Se prevé el inicio progresivo de la atención con los pasos descritos progresivos para lograr la sostenibilidad financiera del modelo de atención.

V. CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO 482 DE 2025 CON TERRITORIO INDÍGENA DE ZONA NORTE EXTREMA DE LA ALTA GUAJIRA (WUINPUMÜIN):

De conformidad con lo establecido en el Decreto 482 de 2025 del Ministerio del Interior, “*por el cual se establece el régimen transitorio, se dictan normas fiscales y demás disposiciones necesarias, y se imparten instrucciones a las entidades del Gobierno Nacional para la puesta en funcionamiento, con fines político-administrativos, del Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin)*” y, de la Resolución No. 139 de 31 de julio de 2025, “*por la cual se inscribe la CONFORMACIÓN y el REPRESENTANTE LEGAL del CONSEJO INDÍGENA del TERRITORIO INDÍGENA DE LA ZONA NORTE EXTREMA DE LA ALTA GUAJIRA (WUINPUMÜIN), en el departamento de La Guajira*”, se reconoce oficialmente la conformación y delimitación de este territorio indígena y su estructura de gobierno propio. El decreto en mención incorpora dentro del Territorio Indígena Wuinpumüin a los corregimientos de Taroa, Puerto Estrella, Nazareth, Punta Espada, Castillete, Puerto López, Siapana, Wualetpá y Tawaira, los cuales, en virtud de esta normatividad, pasan a enmarcarse en un régimen administrativo especial que reconoce la autonomía territorial y las formas propias de gobierno del pueblo Wayuu.

En atención a lo anterior y con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento institucional en el marco del régimen transitorio, la Dirección Regional, en acompañamiento de la Subdirección General y de la Dirección de Contratación y Dirección de Planeación, adelantará la suscripción de un contrato o convenio interadministrativo con el Consejo Indígena del Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira (Wuinpumüin), en el marco del reconocimiento otorgado mediante el Decreto 482 de 2025, como territorio indígena.

Dicho instrumento resulta indispensable para que esta instancia sea la encargada de ejecutar los recursos asignados al territorio, en coherencia con los principios de autonomía, autogobierno, participación y administración propia, establecidos en la normatividad vigente y en los mandatos de la jurisdicción especial indígena.

Este deberá establecer de manera clara las responsabilidades, derechos y deberes que implica la ejecución de los recursos públicos destinados a la operación de la atención integral a la primera infancia en los nueve corregimientos dispuestos en el Decreto 482 de 2025. Para su formulación, se tendrán en cuenta antecedentes y experiencias similares desarrolladas en otros territorios del país.

Así mismo, el Territorio Indígena deberá contar con una organización propia encargada de liderar la atención integral a la primera infancia en su jurisdicción. Para la definición de minutas y demás aspectos técnicos y operativos, deberán conformarse las mesas de trabajo correspondientes a nivel nacional y territorial, con el fin de lograr la suscripción del convenio e iniciar la prestación del servicio en las fechas previamente establecidas.

La suscripción del convenio no solo da cumplimiento al Decreto 482 de 2025, sino que también garantiza la coordinación nación-territorio, fortalece la gobernanza indígena y asegura que la inversión pública se realice conforme a las prioridades, planes de vida y decisiones adoptadas por la comunidad del Territorio Indígena Wuinpumün.

VI. USO DE CUENTAS MAESTRAS:

La Dirección Regional debe prever en los instrumentos contractuales que las EAS se obligue a disponer de una cuenta de ahorro la cual se constituirá en una cuenta maestra de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022, donde se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato.

La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. Así mismo en marco de esta obligación deberá reportar al supervisor del contrato de manera mensual el manejo y los movimientos de la cuenta maestra. En caso de que la supervisión detecte manejos inadecuados de la cuenta maestra, podrá solicitar a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces a nivel regional, adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios y las acciones legales que correspondan.

VII. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE MEMORANDO.

La Dirección Regional, la Dirección de Primera Infancia y Planeación, así como la Subdirección General, serán las instancias responsables de coordinar la implementación de las presentes

orientaciones, realizar el seguimiento permanente a su cumplimiento y emitir las alertas necesarias para garantizar su adecuada y oportuna ejecución

Cordialmente,


KERLY JAZMÍN ÁGAMEZ BERRIO.

Directora de Contratación


JULIE PAULINE TRUJILLO VANEGAS

Directora de Primera Infancia


MILTON FABIAN FORERO MELO

Director de Planeación


ADRIANA VELÁSQUEZ LASPRILLA

Subdirectores General


ASTRID ELIANA CÁCERES CÁRDENAS


Directora General

Anexos:

1. Matriz de Zonificación 2026
2. Modelo de Estudios Previos de contratos de aporte
3. Modelo de Invitación Cerrada
4. Estudio de Sector.
5. Guía MAI.
6. Protocolo para la atención del pueblo wayuu
7. Formato de minuta contractual/clausulado
8. Instructivos de cada uno de los pasos que conforman el proceso de selección junto con los formatos de registro.
9. Formulario de manifestación de interés: [FORMATOS PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - Google Drive](#)
10. Formulario de invitación: <https://forms.gle/tyff7jikcmKjb6Vy8>
11. Informe ejecutivo, línea base de ejecución, de los contratos de aporte para la atención integral del pueblo Wayuu, presentado por la Subdirección General.

Aprobó:

José Miguel Rueda - Jefe de la Oficina Jurídica 


Oscar Javier Manrique Ladino - Director Financiero 

Juan Felipe Valencia Montoya 


Subdirector Técnico Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infancia

Revisó:


Jessika Andrea Merchán López - Contratista Dirección de Contratación 

Carlos Gandhi Tarazona Rojas - Contratista Dirección de Primera Infancia. 

Jorge Alfonso Díaz Pérez - Asesor Subdirección General 

Diana Carolina Baloy - Asesora Dirección General 

Proyectó:

Fredy Alexander Mendoza Sánchez - Contratista Subdirección General 

Katherine Córdoba Enríquez - Contratista Subdirección General 

Ana Milena Rozo - Contratista Subdirección General 

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia